

Al contestar refiérase
al oficio N° **12366**

22 de agosto del 2019
DJ-1055

Doctora
Hannia Rodríguez Mora, Presidenta
JUNTA DE RELACIONES LABORALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
asesorialegal@itcr.ac.cr

Estimada señora:

Asunto: *Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Falta de competencia del órgano contralor.*

Se refiere este Despacho a su oficio sin número de fecha el 05 de agosto de 2019, mediante el cual solicita criterio sobre la aplicación del artículo 23 de la Convención Colectiva del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que trata sobre el tema de antigüedad y pago de anualidades. Se plantean tres aspectos en los cuales se desea que se desarrolle el criterio:

- El reconocimiento de la antigüedad acumulada en el sector público.
- Los criterios y mecanismos de cómputo y ejecución de dicho reconocimiento.
- La identidad y naturaleza de las fundaciones y empresas del sector en las que procede dicho reconocimiento.

En relación a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n° 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de sus competencias, atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

Al respecto, el “*Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República*”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República, entre los que se citan en lo de interés:

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. *Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:*

1. *Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.* (...)” (El destacado es nuestro).

De lo expuesto se desprende con claridad que la consulta, en los términos planteados, no cumple con los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor por las razones que de seguido se exponen.

De conformidad con el inciso 1) del artículo 8 del Reglamento supra mencionado, las consultas sometidas ante este órgano contralor deben versar sobre aspectos que se encuentren dentro del ámbito de las competencias constitucionales y legales asignadas a esta Contraloría General. Es decir, tiene que existir alguna relación con la Hacienda Pública y sus deberes y atribuciones de control y fiscalización.

Obsérvese que lo que se plantea son temas específicos sobre el análisis jurídico del contenido del artículo 23 de la Convención Colectiva del Instituto Tecnológico de Costa Rica, específicamente con el tema de antigüedad. Cabe indicar que en primera instancia es la administración encargada de realizar las valoraciones correspondientes de acuerdo con el bloque de legalidad. Como segundo aspecto, los temas de empleo público y convenciones colectivas han sido abordadas prevalentemente por la Procuraduría General de la República.

De lo anterior se concluye que al incumplir su consulta con el requisito establecido en el inciso 1) del numeral 8 del citado Reglamento, resulta inadmisibles.

Así las cosas y, atendiendo a lo establecido en el artículo 9¹ de la misma normativa, se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite.

Atentamente,



Licda. Mónica Hernández Morera
Fiscalizadora, División Jurídica
Contraloría General de la República

MHM/LFMM
Ni: 21096-2019.
G: 2019002988-1
EXP: CGR-CO-2019005328.

¹En lo de interés se establece: “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso de sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”.